

CULTURA Y POLÍTICAS: ANTECEDENTES Y TESTIMONIO SOBRE LA ETAPA QUE SE INICIA EN 1983

Luis Gregorich (*)

Los apuntes que siguen se proponen brindar un testimonio acerca de la construcción de políticas y gestiones culturales en la Argentina, a partir del restablecimiento de la democracia en 1983. Este testimonio será limitado e insuficiente, porque mi propia experiencia lo es, pero quizá sumado a otros pueda resultar útil para un análisis más profundo de un período de transición que, en cierto sentido, aún no ha concluido. Alternaré el vistazo sobre los antecedentes, incluyendo los datos históricos y cronológicos, con unas pocas notas teóricas e, inevitablemente, con (las menos posibles) referencias personales.

En 1982, al levantar la dictadura militar la veda política, me afilié, por primera vez en mi vida, a un partido político, en este caso la Unión Cívica Radical, la agrupación entonces casi centenaria que había protagonizado diversos hechos decisivos de la historia argentina. Dentro de este partido, me acerqué inmediatamente al Movimiento de Renovación y Cambio, encabezado por Raúl Alfonsín, que me parecía la alternativa progresista capaz de cambiar el rumbo de nuestro sistema político, reequilibrándolo y poniendo un freno tanto a los militares conservadores como a la larga hegemonía peronista.

Hasta entonces había sido, si se acepta mi propia definición, un intelectual independiente, crítico, que tras un paso por las concepciones marxistas, recaló en una izquierda moderada, republicana y socialdemócrata, ideario nada transgresor ni espectacular que sigo sosteniendo hoy. Me había ganado la vida por muchos años trabajando en el mundo editorial y en el periodismo, había publicado algunos libros,

(*)Escritor y periodista. Ex Subsecretario de Cultura de la Nación. Ex Vicepresidente de la SADE (Sociedad Argentina de Escritores) y de la Fundación El Libro. Autor de "Tierra de nadie", "La utopía democrática" y "Escritores del futuro", entre otros libros, y guionista de "La República perdida".

había ejercido extensamente la crítica literaria, y estaba a punto de empezar a escribir el guión de una película documental sobre la historia argentina que se llamaría *La República perdida* y que se estrenaría en 1983.

Mi decisión de participar más activamente en la vida política, y las razones que tuve para hacerlo, no fueron especialmente originales. Muchos otros intelectuales, escritores, cineastas, músicos, artistas plásticos y periodistas hicieron lo mismo, y casi al mismo tiempo. El sentimiento y los reclamos de la época, en esos años difíciles pero en los que se advertía un renacimiento, excluían la neutralidad y el *no te metás*. No resultó extraño que reaparecieran en escena muchas personalidades de la cultura vinculadas al peronismo, pero lo verdaderamente nuevo fue la afluencia masiva al MRC liderado por Alfonsín, y la representatividad de los que se integraban. El ámbito de reunión fue el CPP (Centro de Participación Política), dirigido por Jorge Roulet. Se trataba de reflexionar sobre la situación de la cultura y las huellas que en este campo había dejado el Proceso militar, de comparar políticas y legislaciones culturales en diferentes países, de mantener un diálogo abierto con los distintos representantes de la cultura enrolados en otros partidos y tendencias, y finalmente de elaborar un programa de gestión para quien creíamos iba ser el futuro Presidente elegido por el voto popular.

El grupo de cultura del CPP llegó a reunir más de un centenar de personas. Los coordinadores del grupo éramos el recordado Luis Torres Agüero y yo. Solo a título de información daré algunos nombres de sus integrantes: los escritores Marcos Aguinis, Jorge Aulicino, Eduardo Belgrano Rawson, Aída Bortnik, Carlos Gorostiza, Santiago Kovadloff, María Esther de Miguel y Pacho O'Donnell; los cineastas Manuel Antín, Martín Schor, Javier Torre y Ricardo Wulicher; la historiadora Hebe Clementi; los teatristas y actores Alejandra Boero, Osvaldo Bonet, Luis Brandoni. Héctor Calmet, Alfredo Iglesias, Pablo Moretti, Jorge Sassi y Myriam Strat; los músicos, musicólogos y críticos musicales Víctor Bouilly, Jaime Braude, Iván Cosentino, Ana D'Anna y Guillermo Graetzer; los comunicadores sociales y periodistas Jorge Aráoz Badí, Leonardo Busquet, Ramiro de Casabellas, Miguel Angel Merellano y Enrique Vázquez; el investigador cultural Luis Alberto Melograno Lecuna; los artistas plásticos Julián Althabe, Horacio Bernasconi, Remo Bianchedi, Ana Borrás, Domingo Florio y Ester Gurevich.

Se hicieron diversas publicaciones, con propuestas generales y sectoriales, y por fin nos tocó preparar el capítulo correspondiente a Cultura de la plataforma electoral de Raúl Alfonsín, que mientras tanto se había convertido en el candidato de la Unión Cívica Radical a la Presidencia. Era la primera vez que la cultura, en forma específica, en lugar de estar incluida en el capítulo correspondiente a políticas educativas, ganaba un lugar propio en la plataforma del radicalismo. Fui el encargado de la redacción final de ese texto, después de recibir las conclusiones de los distintos subgrupos y sectores. Ese ambiguo destino de conducir comisiones de cultura en tiempos electorales me habría de tocar dos veces más: en 1989, con el candidato radical a la Presidencia,

Eduardo Angeloz (derrotado), cuya plataforma cultural también redacté; y en 1996, otra vez a la cabeza de un amplísimo grupo, con el candidato radical a la Jefatura de Gobierno de Buenos Aires, Fernando de la Rúa (triunfante). Este protagonismo casi abusivo en campañas y tiempos previos no se vio completado en las respectivas administraciones (de Alfonsín en la nación y de la Rúa en la ciudad), ya que apenas tuve una breve experiencia de gestión, como Subsecretario de Cultura en el ámbito nacional, en 1988. En el gobierno de la ciudad desempeñé otras funciones, en el campo de la coordinación de gabinete y la comunicación social. Pero siempre permanecí, como observador, como crítico y como consejero (no siempre escuchado), vinculado al quehacer y a las políticas culturales.

El sentimiento y los reclamos de la época, en esos años difíciles pero en los que se advertía un renacimiento, excluían la neutralidad y el no te metás.

EN TORNO A CULTURA Y DEMOCRACIA

Si existe un eje en torno al cual se han articulado los debates y las plataformas culturales del radicalismo, ese ha sido el definido por la relación, y la interdependencia, de dos conceptos: cultura y democracia.

Postulábamos, en aquellos días de 1983, junto con la UNESCO, que no es adecuado ya hablar de *cultura* en un sentido universal y único, sino de *culturas* diversificadas y autónomas, que gozan de los mismos derechos y que pueden convivir sin privilegios ni innecesarias clasificaciones jerárquicas. Cada una de tales culturas constituye un conjunto de valores peculiar e intransferible, y la afirmación de la identidad cultural es una de las claves de la liberación de los pueblos.

Debe señalarse –decíamos– que la identidad cultural de un pueblo se vivifica en el contacto y en el intercambio con las tradiciones y las realizaciones de los demás. El pluralismo cultural, sin inútiles escalas de dominio o dependencia, despojado de prejuicios, será el mejor instrumento para el acercamiento de los pueblos y, a la vez, para el enriquecimiento de cada identidad en particular.

Otra postura que defendíamos, con un sello muy de época y que sin embargo sigue teniendo vigencia, era que la cultura erige una dimensión fundamental del desarrollo y crecimiento de un país, y contribuye a fortalecer su independencia y

soberanía. Se trata de un concepto de aplicación general, pero es en el mundo subdesarrollado y en las sociedades de la periferia donde tiene mayor vigencia. Frente a una concepción puramente economicista y consumista de la transformación social, se trataba de defender las ventajas de un planteo que promoviera la plena realización individual, en el que cada uno pudiese acceder a los valores reclamados por su propia idiosincrasia y por su sed de conocimiento. El papel de la cultura sería importante, así, para proveer de sentido tanto al trabajo como al ocio creador, y terminaría obrando como eficaz escudo contra la invasión de productos estandarizados provenientes de los centros imperiales.

Si revisamos hoy, en 2006, estos posicionamientos, podemos reprocharles cierto relativismo y cierto descuido en la búsqueda de valores universales e imperativos categóricos en el terreno cultural, pero también advertiremos que se han visto confirmadas sus predicciones en lo que se refiere al extraordinario desarrollo de las industrias culturales, que se han vuelto un factor económico de primer orden en muchos países, así como en plácidos –aunque no menos eficaces– instrumentos de penetración y dominio.

El texto que resumía, para nosotros, el marco en que ha de moverse una cultura democrática, estaba expresado por el artículo 27 de la Declaración de Derechos Humanos, según el cual *toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.*

De esta forma, la democratización de la cultura implicaba un programa de gobierno y obligaba a una justa valoración de la función del Estado en la promoción cultural, impulsando la participación de todos los miembros de la comunidad, sin importar cuál fuera su origen social ni sus ingresos económicos, en la creación y el disfrute de los bienes culturales, y también en la toma de decisiones respecto a la vida cultural.

La consecuencia práctica, en la Argentina, era la necesidad de la descentralización y la federalización cultural. Los grandes centros urbanos –y en nuestro caso Buenos Aires, la cabeza de Goliath antes que nadie– están por lo general provistos de grandes museos, teatros, auditorios de música, bibliotecas e instituciones especializadas, e incluso ricos en tradición cultural y gusto estético. Sus habitantes, en general, poseen un ingreso per capita mayor al resto de la población, lo que les permite acceder, también, a mejores y más sofisticados consumos. Esto obliga, sin abandonar el apoyo estatal a estos grandes organismos ya existentes, a un notable esfuerzo presupuestario que mitigue el abandono en que suelen vegetar las pequeñas y medianas comunidades. Es un objetivo que se irá logrando a medida que se configure la descentralización administrativa y regional de la vida cultural, alcanzando, al mismo tiempo, una forma de integración nacional perdurable.

Como es obvio, sosteníamos que la cultura democrática es inseparable de un ejercicio irrestricto de las libertades individuales. La libertad de expresión y de

pensamiento no podrá sufrir recortes, y ha de estar íntimamente vinculada, a la vez, con la libertad de acceso a los bienes culturales y la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo. Con la misma impronta, deberían ser proscriptas todas las formas de censura, explícita o encubierta, y las discriminaciones de cualquier índole.

Por fin, proclamábamos que una política cultural coherente no podía trazarse sin una armoniosa y permanente interacción con otros tres campos de actividad: la educación, los avances científicos y tecnológicos, y los medios de comunicación masivos. La relación con el escenario educativo debía darse, no solo en el área de intersección de la enseñanza artística, sino también en la planificación general de la educación, en busca de la homogeneidad de pautas y objetivos. La ciencia y la tecnología, con sus audaces innovaciones, permitían un constante replanteo de las técnicas de transmisión del conocimiento y de la cultura, enriqueciendo todo modelo cultural. Y el papel de los medios masivos, por su penetración y capacidad formativa, por sus posibilidades de manipulación autoritaria o sectorial, no requería mayores explicaciones. (Hoy seguramente tendríamos que añadir al turismo como otros estrecho colaborador y socio de la cultura.)

Y así, después de recorrer este camino, nos preguntábamos: ¿había conocido la Argentina, en su pasado y su tradición, políticas de esta índole? Primero, iremos hacia atrás para verificarlo; después, intentaremos un breve balance de los años de gestión cultural en casi un cuarto de siglo de recuperación de la democracia, es decir, hasta hoy mismo.

UN POCO DE HISTORIA

En la Argentina no existieron programas culturales más o menos explícitos hasta, podría decirse, los años que siguieron a la Organización Nacional. El liberalismo de Moreno, el tradicionalismo conservador del padre Castañeda, el utopismo unitario de Rivadavia, el socialismo liberal de Echeverría, las intermitentes propuestas de De Angelis, no alcanzaron a convertirse en cuerpos doctrinarios ni en programas coherentes. Alberdi y Sarmiento, cada uno a su manera, ya con un matiz conservador, ya con un matiz liberal, fueron los primeros en

Proclamábamos que una política cultural coherente no podía trazarse sin una armoniosa y permanente interacción con otros tres campos de actividad: la educación, los avances científicos y tecnológicos, y los medios de comunicación masivos.

postular una teoría global de la Argentina y su futuro, en ambos casos con un vigoroso mensaje de esperanza y crecimiento.

Los hombres del 80, ante la necesidad de integrar las masas de inmigrantes recién llegados a la vida productiva de la nación, dictaron una legislación progresista entre la que debe destacarse la ley 1420 de educación común, que contribuyó a una rápida alfabetización. Las poblaciones urbanas del próspero litoral, sobre todo, fueron las que se beneficiaron con estos adelantos. Al tiempo que se impulsaba la inmigración masiva, se desalentaron las migraciones internas sin fomentar –simultáneamente– el desarrollo regional; la consecuencia fue que buena parte del interior languideció y decayó, tanto en su desarrollo económico como en su vida cultural.

Aunque el régimen roquista promovió el crecimiento, basado en un modelo productivo agroganadero y exportador, además de una asociación estrecha con el Imperio Británico, restringió notoriamente la participación política mediante el uso del fraude electoral. En el terreno de la cultura, los planes oficiales se orientaron hacia el elitismo y la preocupación por las minorías ilustradas. El modelo de Buenos Aires fue el París republicano y laico; para los *clubmen* que, a la vez, eran los escritores, intelectuales y dirigentes políticos del roquismo, el viaje a la añeja Europa constituía la experiencia primordial, de la cual podía regresarse, con las alforjas colmadas, a la prometida patria del porvenir.

Sin embargo, los propios inmigrantes comenzaron a edificar, junto a los criollos viejos, desordenadamente, una suerte de alternativa cultural, que iba cristalizando en el periodismo militante, en la canción popular y, un poco después, en el sainete, que habría de convertirse en el género teatral por excelencia del país del aluvión inmigratorio.

Con la promulgación, ya en pleno siglo XX, de la ley Sáenz Peña de sufragio obligatorio y universal (masculino), y el posterior acceso al poder de la Unión Cívica Radical, la participación política se incrementó, sobre todo con la presencia activa de las nuevas clases medias. A la vez, la Reforma Universitaria creó un nuevo espacio de libertad y debate. En la década de los '20, aunque no hubo programas culturales de recambio, los movimientos de vanguardia, especialmente en la literatura y las artes visuales, conmovieron el ambiente. Eran los años felices del alvearismo, en los que se escondía, sin embargo, un presagio sombrío.

La quiebra se dio, en los arrabales de la crisis mundial, con el golpe militar de 1930 y la restauración conservadora. La educación y la cultura oficial quedaron en manos de prohombres del Antiguo Régimen; muchos escritores e intelectuales iniciaron un repliegue; la revista *Sur* es un ejemplo de este deliberado desentendimiento de los asuntos públicos. Libros como *El hombre que está solo y espera* de Raúl Scalabrini Ortiz, *Radiografía de la Pampa* de Ezequiel Martínez Estrada e *Historia de una pasión argentina* de Eduardo Mallea documentaron, cada uno a su manera, la crisis de la Argentina pastoril y agroexportadora.

Con el peronismo ingresó a la escena política, en 1946, la nueva clase obrera industrial que había sido dejada de lado por gobiernos anteriores. A pesar de tan indiscutible carácter popular, la política cultural peronista fue contradictoria. Por un lado, las expresiones culturales más ricas de ese período estuvieron implícitas, podría decirse, en su política global de inclusión social, y se manifestaron en formas tales como la radiofonía, el cine popular, la historieta y una iconografía redentorista y monumental. Por otro lado, junto a logros reales hubo inclinaciones coercitivas y autoritarias, escaso respeto por la libertad de expresión, tendencia a la propaganda oficial en la educación pública, mientras a menudo los organismos culturales y educativos fueron puestos en manos de sectores ultramontanos que poco pudieron hacer para transformarlos.

A partir de la caída del peronismo en 1955, y hasta la definitiva recuperación democrática en 1983, la inestabilidad política y económica ha sido la regla, y no es extraño que no haya habido continuidad y coherencia en la vigencia de políticas de estado, tanto en cultura como en lo demás. De la etapa de la denominada Revolución Libertadora (1955-1958) puede rescatarse la creación de dos importantes entes estatales de cultura: el Fondo Nacional de las Artes, una suerte de banco de la cultura que desde entonces otorga subsidios y préstamos blandos a distintas entidades e individuos vinculados con variadas formas de esta actividad; y el Instituto Nacional de Cinematografía, cuyo objetivo reside en fomentar, también con préstamos y apoyos de diverso orden, a este arte audiovisual e industrial. Como otros jalones habría que mencionar, en el comienzo de los años '60, la fundación de EUDEBA (Editorial Universitaria de Buenos Aires), la mayor editorial pública argentina, y, en la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, del Teatro General San Martín, que a partir de entonces se convertiría en la más importante escena del teatro de drama de la Argentina.

Durante los siete años y medio de la última dictadura militar (1976-1983) poco hay para mencionar, salvo lo que merece repudio: censura, listas *negras*, desnacionalizaciones, compulsión educativa, predominio de la doctrina de seguridad nacional, desaparición violenta de miles de personas (relacionadas o no con la actividad cultural) y destierro,

Las semillas de 1983 cayeron en suelo fértil, aunque no todos los retoños que brotaron fueron igualmente saludables.

voluntario o forzado, de muchas otras. Y una cultura de la muerte que desgraciadamente estuvo compartida por la tiranía castrense y el utopismo guerrillero.

UN BALANCE PROVISIONAL

Es cierto que, si comparamos el entusiasmo y la capacidad de reclutamiento político suscitados por la primavera democrática de 1983, y el sentimiento de melancolía y alejamiento de la actividad pública por parte de muchos sectores intelectuales en 2006, un balance sería más bien desolador. Pero hay que evitar un pesimismo simplista. Esta clase de decantamientos, de desilusiones, es común en cualquier parte del mundo. Con sus idas y venidas, la gestión cultural del Estado –y de los Estados provinciales y municipales– se afirmó y superó, por mucho, las penurias del régimen militar. Las semillas de 1983 cayeron en suelo fértil, aunque no todos los retoños que brotaron fueron igualmente saludables.

Ante todo, el debate sobre políticas culturales, como espacio autónomo, ha quedado definitivamente instalado, y ya son moneda corriente, no solo en terreno académico sino también en la jerga periodística, conceptos como *patrimonio cultural*, *industrias culturales*, *identidad cultural* o *multiculturalismo*. El feliz hecho de que un número completo de esta revista/libro, publicada por la Asociación de Administradores Gubernamentales, se dedique a las políticas culturales, supera la ambigüedad y resulta positivo: aunque debieron pasar 12 años de existencia de la revista, finalmente la Cenicienta de las políticas públicas logró aprobar el examen.

También han contribuido a popularizar los conceptos citados gran número de reuniones políticas y académicas, convocadas por los diferentes gobiernos, si bien en general poco pluralistas y más bien consagradas al lucimiento de los funcionarios de turno. La constitución, un tanto tambaleante, del MERCOSUR ha incrementado asimismo la consideración mediática y oficial de las políticas culturales (y del intercambio cultural), uno de los pocos campos en que se ha podido verificar algunos avances concretos de la integración regional.

La discontinuidad política e ideológica no ha ayudado, en estos 23 años escasos, a que hubiera continuidad y coherencia en el conjunto de programas impulsados desde el Estado. A un período inicial, con Alfonsín como Presidente, que podría ser caracterizado como etapa radical de centroizquierda y socialdemocrática, sucedió la década de Menem, definida como peronista neoliberal y de centroderecha; después tuvimos los dos años aliancistas, de confusa ideología, con de la Rúa, y luego, tras el descalabro de 2001, el peronismo más o menos ortodoxo y de centro de Duhalde, hasta culminar en el actual gobierno de Kirchner, peronista populista y de centroizquierda. Por otra parte, los grandes partidos políticos argentinos no han sido capaces de promover escuelas de formación política como ocurre en otros países (por

ejemplo, en España y Alemania), con lo cual se desaprovechan experiencias individuales, no alcanzan a formarse equipos coherentes y que excedan un período de gobierno, y todo queda en manos de los caprichos o enamoramientos ideológicos de los operadores de turno.

En la administración cultural, además de todos estos saltos, hay que anotar una secuencia que se arma con 13 Secretarios de Cultura de la Nación diferentes, con un promedio de gestión, para cada uno, de 1 año y 9 meses. En la Presidencia de Alfonsín, de 1983 a 1989, se vio desfilar a 3 (Carlos Gorostiza, Marcos Aguinis y Carlos Bastianes); en la de Menem, de 1989 a 1999, a 5 (Julio Bárbaro, José María Castiñeira de Dios, Jorge Asís, Pacho O'Donnell y Beatriz Gutiérrez Walker); en la de la Rúa, a 1 (Darío Lopérfido); en la fugacísima de Rodríguez Sáa, a 1 (Teresa de Solá); en la de Duhalde, a 1 (Rubén Stella), y en la de Kirchner, a 2 (Torcuato di Tella y José Nun). Personas distinguidas y de alta calificación en sus variopintas especialidades, en su mayoría, pero que no pudieron superar cierta inercia burocrática ni otorgar su sello personal a gestiones fracturadas e intermitentes. No mencionaré, por cortesía, el número aún mayor, de Subsecretarios, entre los que tuve la suerte o desgracia de contarme. Tampoco vale la pena detenerse en los cambios de jurisdicción de la Secretaría de Cultura nacional, que ha vacilado entre el Ministerio de Educación y la Presidencia de la Nación, ámbito este último en el que se halla ahora. La idea de un Ministerio de Cultura, que elevaría simbólicamente su jerarquía (y que tal vez incrementaría su presupuesto), no ha podido concretarse.

Ante esta sucesión de cambios de sello y firma responsable, tampoco pudo avanzarse demasiado en otro terreno clave de las políticas culturales: el legislativo. Resumiremos la situación diciendo que, hasta la fecha, no ha podido promulgarse una Ley de Preservación del Patrimonio Cultural moderna, viable y actualizada, que sea capaz de convertirse en el centro de una política conservacionista de la que carecemos. Este vacío legal nos pone en inferioridad de condiciones, no solo con los países centrales, sino también con muchos de la región, ya protegidos formalmente. Se sabe que los cambios tecnológicos, la reproducción industrial de la imagen y el sonido, y los renovados soportes de la información han ido construyendo un

La discontinuidad política e ideológica no ha ayudado, en estos 23 años escasos, a que hubiera continuidad y coherencia en el conjunto de programas impulsados desde el Estado.

nuevo patrimonio cultural, tangible e intangible, que se ha agregado a las obras de arte tradicionales que pueblan los museos. Esta situación obliga a que las políticas culturales se ocupen, con las mejores técnicas, de la conservación de los viejos y los nuevos materiales, no descuidando, además, la posibilidad del disfrute interactivo de estos bienes, que refirman nuestra identidad. El abandono y el olvido no son buenas políticas. Hay que mencionar, como ejemplo negativo, la pérdida de la mayor parte del cine argentino de la época muda, debida a la inacción y a la desidia en materia de seguridad.

Las asimetrías económicas y sociales que ofrece un país como la Argentina, se manifiestan también, como es obvio, en la esfera de la actividad y del consumo cultural. La única jurisdicción del país que invierte en cultura de acuerdo a parámetros internacionales es la ciudad de Buenos Aires, oasis de privilegio frente a la relativa pobreza del presupuesto nacional, y sin hablar de los mínimos recursos de buena parte de las provincias y municipios. En las provincias más ricas, se reproduce, con matices, la realidad asimétrica: mientras las ciudades capitales gozan de cierta holgura, apenas se pasa al interior provincial la oferta cultural decae o se degrada. En cambio, en las provincias menos favorecidas las carencias se emparejan y hay poco para celebrar.

Es evidente que se impone la acción del Estado nacional, pero no a través de las dádivas ocasionales y la caridad políticamente dirigida. Por supuesto que lo más importante es favorecer el desarrollo y el crecimiento económico regional, para que los estados provinciales, y sus municipios, con sus propios recursos, puedan mejorar su actividad cultural. Pero, mientras tanto, la Nación puede colaborar en muchos aspectos, no necesariamente enviando a las provincias a grandes ídolos populares o a elencos de la Capital, sino financiando emprendimientos locales y prestando atención a las vocaciones y a los talentos de cada lugar. En este sentido, es asimismo particularmente importante la tarea específica de capacitación cultural (con la formación de administradores y animadores) que han desarrollado diversos organismos, entre ellos el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) y distintas Universidades. Vale la pena destacar, en estas disciplinas, la labor de –entre otros– el prematuramente desaparecido y recordado Patricio Lóizaga, de extracción peronista, y Jorge Cremonte, aún en plena actividad, de origen radical.

Si la discontinuidad ha sido la norma general, por lo menos en algunos organismos particulares hubo una línea de gestión creativa que no se interrumpió. Es el caso del Instituto Nacional de Cinematografía, donde la tarea refundadora de Manuel Antín a su frente durante el período alfonsinista se vio complementada por los distintos directores del menemismo, y después por José Miguel Onaindia (en tiempos de la Alianza) y Jorge Coscia (con Duhalde y Kirchner). La política de fomento al cine argentino se mantuvo y afianzó, y el resultado fue el surgimiento de un nutrido grupo de nuevos creadores cinematográficos –directores, actores, guionistas– que obtuvo reconocimiento dentro del país y fuera de él, especialmente después del Oscar al mejor

filme extranjero obtenido en 1986 por *La historia oficial*, dirigida por Luis Puenzo.

Las políticas vinculadas con el libro y la lectura –otra de las industrias culturales clave– han tenido resultados ambiguos. Debe destacarse la gestión de Hebe Clementi, durante los `80, a la cabeza del Plan Nacional de Lectura, y –por otro lado– la promulgación de la ley orgánica de las Bibliotecas Populares, una red benemérita que atraviesa todo el país y que con la nueva legislación ha asegurado su subsistencia. Por otra parte, el proyecto de creación de un Instituto Nacional del Libro no ha terminado de cristalizar, básicamente por la incomprensión (y la anomia) entre la gestión pública y el sector privado. Los editores privados por lo común quedan satisfechos cuando el Estado les compra algunos cientos de miles de libros, y a su vez los funcionarios oficiales se conforman con digitar esas compras y presentarlas como un logro personal.

Entre las artes del espectáculo, la actividad teatral ha recibido un impulso, por llamarlo así, federalista, con la creación del Instituto Nacional del Teatro, consagrado a financiar y promover experiencias teatrales en las provincias, y ligar la escena de Buenos Aires con las del interior. El Teatro Nacional Cervantes, el único de esa jurisdicción en la Capital, vegeta sin proyecto propio, sobredimensionado y a la vez sosteniendo una lucha desigual contra el Complejo Teatral de Buenos Aires, un conjunto de cinco teatros liderado por el ya mencionado Teatro San Martín y dependiente del gobierno de la ciudad. ¿Competencia de Nación contra ciudad? Nada más innecesario. En su momento propusimos que el Cervantes se convirtiera en nuestro *Teatro de la Lengua*, es decir, en un teatro que solo representara obras escritas en español (argentinas, hispanoamericanas y españolas), clásicas y modernas, con lo cual adquiriría un perfil propio. No hace falta decir que la propuesta ni siquiera fue considerada.

La discusión sobre el porcentaje del presupuesto nacional destinado a la Secretaría de Cultura ya tiene una larga historia, y no hay casi ningún Secretario que, después de asumir, no haya proclamado, con cierto optimismo, que esas cifras se verían inexorablemente aumentadas. Naturalmente, no ocurre nada, y a veces el presupuesto baja en vez de subir. El discurso plañidero es siempre el mismo: estamos por debajo, muy por debajo de lo

La gestión cultural sigue representando uno de los más aptos terrenos para luchar por la libertad y la igualdad, los dos valores que resumen las mejores aspiraciones del Estado moderno.

que recomienda la UNESCO, y –como si fuera poco– el presupuesto de cultura de la ciudad de Buenos Aires duplica o triplica el de la Nación. Jamás se ha visto –al menos, no hemos tenido noticia– de un proyecto de cultura, audaz e innovador pero realista, que esos mismos secretarios alcanzaran a presentar durante su gestión, y que de verdad justificara el incremento en la asignación de fondos. No sabemos de todos modos, aun cuando ese proyecto existiera y fuera lícitamente formulado, si podría llegar a obtener la aprobación del Poder Ejecutivo y del Congreso, en general preocupados por otras urgencias.

Al final de este testimonio, que no pretende representar a ninguna corporación ni partido político, conviene insistir en unas pocas ideas centrales.

No debemos confundir la definición general y amplia de la cultura (término polisémico por excelencia, que a veces se opone a naturaleza, y otras veces abarca todos los procesos y objetos simbólicos creados por los hombres), con la gestión cultural estatal, que tiene precisos límites y connotaciones. Para seguir con esta última, diremos que sigue representando uno de los más aptos terrenos para luchar por la libertad y la igualdad, los dos valores que resumen las mejores aspiraciones del Estado moderno. En tal sentido, las políticas culturales, para proyectarse al futuro, deberían –útese este verbo con el menor sentido autoritario posible– asegurar a todos el acceso a la creación y el consumo de los bienes culturales y simbólicos, promover nuestra identidad en el diálogo abierto con otras culturas y no desde la cerrazón y el aislamiento, y hacerse fuertes tanto en la inteligente conservación de nuestro patrimonio, como en su renovación, recreación y reinención.